

# Boletín Oficial



DE LA PROVINCIA DE LAS BALEARES.

Núm. 467.

## Artículo de oficio.

Núm. 1438.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA  
DE LAS ISLAS BALEARES.

En la Gaceta correspondiente al día 21 del actual se halla el siguiente:

### REGLAMENTO

para la aplicación de la ley de 23 de febrero de 1870, dictado en conformidad con lo prescrito en la disposición general de la misma.

### CAPITULO PRIMERO.

Formación del presupuesto municipal.

Artículo 1.º La Comisión de presupuestos de cada Ayuntamiento redactará con la debida anticipación el proyecto de presupuestos para cada año económico.

Art. 2.º A este proyecto acompañará una nota ó Memoria explicativa de las diferencias que existan entre el mismo y el presupuesto del año anterior. En ella se harán constar también los cálculos que han servido de base á la designación de los ingresos, exponiéndose las razones que se hubieren tenido presentes para admitir en el modo y forma que se establezca cada clase de recursos.

Art. 3.º Siempre que la Comisión de presupuestos proponga el impuesto de consumos, justificará en la memoria la imposibilidad de cubrir los gastos del Municipio con los recursos autorizados en los párrafos primero, segundo y tercero del art. 2.º de la ley, ó que no siendo suficientes los recursos á que se refieren los párrafos primero y segundo ofrece graves dificultades establecer el repartimiento general.

Art. 4.º El proyecto pasará á la censura del Síndico encargado de la parte económica.

Art. 5.º El proyecto se someterá despues á la aprobación del ayuntamiento; si este le altera, se dejará consignado en la memoria explicativa el

proyecto de la Comisión á fin de que pueda ser apreciado en su día por la Junta municipal.

Art. 6.º Aprobado el presupuesto, se expondrá al público en la Secretaría del Ayuntamiento por espacio de 15 días, lo cual se anunciará previamente por edictos y pregones, y en el Boletín oficial de la provincia si se trata de la capital de la misma.

Art. 7.º Espirado el plazo del artículo anterior, se convocará la junta municipal compuesta del ayuntamiento y asociados, la cual fijará definitivamente el presupuesto.

### CAPITULO II.

De las Secciones y de la Junta municipal.

Art. 8.º En la formación de las secciones que determina el art. 13 de la ley, los Ayuntamientos observarán las siguientes reglas:

1.º Formarán una sola sección los individuos que contribuyan por razón de cultivo y ganadería, ya sean propietarios, ya colonos.

2.º La propiedad urbana formará sección aparte en las poblaciones donde su importancia lo requiera á juicio del Ayuntamiento; en las demás quedará comprendida en la sección anterior.

3.º Las secciones que se formen de los que paguen contribución industrial contendrán, con la posible separación, los contribuyentes por razón de comercio, industria fabril, artes y oficios y profesiones.

4.º Los comerciantes, almacenistas y especuladores por mayor formarán secciones independientes de los que se dediquen á la venta por menor de los mismos objetos, agrupando separadamente á unos y otros donde el número de vecinos lo permita, según lo prescrito en la regla anterior.

5.º Igualmente se procurará que las fábricas, artefactos y grandes establecimientos formen secciones separadas de los talleres y establecimientos menores de confección é industria manuales.

6.º En las poblaciones donde los diversos ramos industriales y mercantiles, aunque de escasa importancia, permitan sin embargo la formación de una sección, el Ayuntamiento convocará á

todos los interesados, y los que de ellos asistan decidirán en votación ordinaria si ha de formarse la sección ó se ha de proceder al repartimiento por calles, barrios ó parroquias, según previene la regla 3.ª del art. 27 de la ley.

7.º Cuando esto último haya de tener lugar, cuidará el Ayuntamiento de que las secciones queden comprendidas en los barrios municipales que existan, procurando dentro de estos la mayor subdivisión posible.

En ningún caso el número de secciones excederá del total de concejales que, según la ley, tenga el Municipio.

Art. 9.º Los Ayuntamientos reclamarán á las Administraciones económicas los datos necesarios para la formación y división de secciones.

Art. 10. Formadas las secciones, el Ayuntamiento, teniendo presente lo prescrito en el artículo 27 de la ley, y especialmente su base 4.ª, señalará el número de asociados que corresponde á cada sección.

Art. 11. Ultimada por el Ayuntamiento la formación de secciones y la distribución de asociados, se expondrán las listas al público en secretaría del ayuntamiento, insertándose también en el Boletín oficial cuando se trate de la capital de la provincia. Esto se hará constar uniendo al expediente un número del Boletín en que hubiese tenido lugar la publicación, y asimismo por medio de una acta autorizada por el juez de paz, su Secretario y tres testigos.

Art. 12. Las reclamaciones contra la formación de secciones y señalamiento de asociados se alegarán ante el Alcalde en los ocho días siguientes á la publicación de las listas. Al reclamante se le entregará, si lo solicita, un recibo en que conste la fecha y objeto de la reclamación.

Art. 13. Terminado el plazo de los ocho días, se reunirá el Ayuntamiento y decidirá, acerca de las reclamaciones interpuestas, comunicando su resolución á cada interesado en el día siguiente al del acuerdo respectivo: si su resolución alterase la formación de secciones ó el señalamiento de asociados, se publicará el nuevo acuerdo en la forma prescrita en el artículo 11.

Art. 14. Los interesados, en el término de ocho días, podrán apelar del acuerdo del Ayuntamiento á la Diputación provincial. En igual término podrá también acudir ante la misma cualquier contribuyente que no hubiese reclamado contra la división de secciones y señalamiento de asociados, y se crea perjudicado por la rectificación que autoriza el artículo anterior.

Art. 15. Terminadas estas operaciones, el Ayuntamiento verificará el sorteo de asociados en la forma que establece el art. 29 de la ley.

En las poblaciones donde por el excesivo número de individuos de cada sección sea difícil verificar en un solo acto el sorteo de todas, el ayuntamiento podrá acordar que se lleve á cabo en locales separados, delegando al efecto en los alcaldes y Regidores las facultades necesarias para presidir y dirigir la operación en cada distrito.

Art. 16. El resultado del sorteo se anunciará por edictos, comunicándolo además por cédula á los elegidos.

Art. 17. Las excusas y excepciones se alegarán ante el Ayuntamiento dentro de los ocho días siguientes á la publicación de los edictos. La resolución que recaiga se comunicará á los interesados, que podrán apelar en otro plazo igual ante la Diputación provincial.

Art. 18. Los individuos designados por la suerte, en unión con el Ayuntamiento, formarán la Junta municipal durante el respectivo año económico.

### CAPITULO III.

Ingresos de los presupuestos municipales y provinciales.

#### SECCION PRIMERA.

Rentas y productos procedentes de bienes, derechos ó capitales.

Art. 19. En los presupuestos provinciales y municipales se consignará siempre como primer ingreso las rentas y productos á que hace referencia el párrafo primero del art. 2.º de la ley.

En la recaudación é inversión de estos recursos se observará lo prescrito en las disposiciones vigentes relativas á cada ramo.

Art. 20 Si no fuesen suficientes los ingresos á que se refiere el artículo anterior para cubrir los gastos del Municipio ó la provincia, se podrá acudir á los otros ingresos que la ley autoriza.

Llegado este caso, las Diputaciones provinciales harán con la debida anticipacion el reparto prevenido en el artículo 23 de la ley á fin de que los Ayuntamientos puedan incluir en sus respectivos presupuestos la parte con que han de contribuir á los gastos de la provincia.

SECCION SECUNDA.

Arbitrios.

Art. 21. El producto de los arbitrios que autorizan los artículos 4.º y 6.º de la ley formará parte del presupuesto municipal, y se destinará indistintamente á todas las obligaciones del Municipio.

Art. 22. Los arbitrios relativos á servicios se impondrán únicamente sobre los costeados por los fondos del Municipio, y no sobre los pertenecientes á empresas particulares.

Art. 23. Los arbitrios impuestos sobre servicios se plantearán por medio de tarifas que determinen el uso y el precio de los actos ó aprovechamientos á que se refieran. De este modo en las aguas se expresará el precio en arriendo de la unidad de medidas que consume ó utilice cada interesado; en los establecimientos de instruccion el importe de las matrículas ó la cantidad que satisfaga cada alumno; en los mataderos el precio que haya de abonarse por cada cabeza en vivo, y así en los demás casos.

Art. 24. Los arbitrios sólo podrán exigirse de las personas que utilicen los servicios á que estén afectos, y no de los demás vecinos.

Art. 25. Sólo será obligatorio el uso de aquellos servicios que, como los mataderos, alcantarillado, cementerios y otros análogos, tengan por objeto la higiene y la salubridad del pueblo.

Art. 26. Los arbitrios de portazgos, pontazgos y barcajes sólo podrán imponerse cuando los medios de comunicacion por cuyo aprovechamiento se exijan pertenezcan exclusivamente al pueblo ó provincia que los imponga. Esta disposicion, sin embargo, no perjudica á los derechos que sobre portazgos, pontazgos y barcajes posean los Ayuntamientos.

Art. 27. Los arbitrios impuestos sobre bebidas, fermentadas, sobre cafés, posadas etc. á que se refiere el artículo 6.º de la ley se recaudarán expidiendo licencias ó patentes.

Una comision de contribuyentes por estos conceptos, elegida por aquellos, propondrá las tarifas correspondientes, las cuales aceptará ó modificará el Ayuntamiento. Este designará previamente el número de individuos que han de componer la comision y el modo y forma de elegirles.

Art. 28. Luego que se establezcan los arbitrios designados en el artículo anterior, no podrá ninguna persona ejercer los actos ni abrir los establecimientos en que aquellos se fundan,

sin justificar el pago de la patente ó licencia.

Será obligatorio la exhibicion del documento que lo acredite, siempre que se pida por los encargados de ejercer la vigilancia en este ramo.

Los casinos, círculos y otros establecimientos análogos de reunion pública están sujetos á este precepto.

Art. 29. No podrán exigirse arbitrios sobre los establecimientos balnearios en aguas públicas y otros servicios análogos que establezcan los particulares, si bien quedarán siempre sujetos á la inspeccion general que al Ayuntamiento corresponde por razon de higiene, policia y ornato.

Art. 30. El establecimiento de la Guardia rural autoriza á los ayuntamientos para cubrir su coste, ya recargando las cuotas que á los propietarios rurales correspondan en el repartimiento general, ya estableciendo una cuota nueva si este no hubiere tenido lugar. Para fijar las nuevas cuotas en el último caso se oirá á una comision compuesta de propietarios rurales y elegida por los mismos. El ayuntamiento designará el número de individuos de que ha de componerse esta comision y el modo y forma de elegirla.

La facultad que concede la ley de crear arbitrios para establecer la guardia rural no impide el que los propietarios puedan asociarse libremente para hacer el mismo servicio, quedando no obstante sujetos en este punto á los reglamentos y ordenanzas del ramo.

Art. 31. Los ayuntamientos pedirán anualmente á la administracion económica de la provincia el papel de multas é indemnizaciones que conceptúen necesario para todo el año. Al fin del mismo devolverán á dicha administracion las existencias que resulten sobrantes.

SECCION TERCERA.

Repartimiento general.

Art. 32. Los ayuntamientos distribuirán á todas las personas que, segun el art. 11 de la ley, estén sujetas al pago del repartimiento general un estado segun el modelo adjunto, en el cual cada interesado, por sí y bajo su responsabilidad, determinará, llenando los huecos, las utilidades imponibles de que por término medio disfrute. Lo mismo en estos estados que en la relacion de que habla el art. 29 se expresará la utilidad media, ya por los productos anuales, ya por el valor en venta de los bienes.

Art. 33. Dentro de los ocho dias siguientes se recogerán los estados para entregarlos á las secciones de que habla el cap. 2.º de este reglamento.

Los contribuyentes que no sepan leer ni escribir podrán presentar sus estados de declaracion en la secretaria del ayuntamiento para que á su presencia, y por las personas que designen, se llenen las casillas correspondientes.

Si algun interesado no devuelve, cuando se le reclame, el estado con la declaracion correspondiente, ni solicita que se extienda esta á su nombre, la seccion, ateniéndose á los datos que posea, fijará por sí la riqueza imponi-

ble, quedando el interesado sin derecho en tal caso á reclamar de agravio por este concepto.

Art. 34. Los estados de declaracion se pasarán á las secciones, las cuales se convocarán ocho dias antes por pregones y edictos, y por anuncios insertos en el Boletín oficial si se trata de la capital de la provincia, expresando el día, hora y sitio de la reunion.

Art. 35. Las secciones, conformándose ó rectificando los estados de declaracion, fijarán á cada contribuyente la utilidad imponible, ateniéndose al hacerlo á lo prescrito en el art. 12 de la ley. Formarán asimismo la relacion que exige el art. 13 de la misma.

Art. 36. Terminadas estas operaciones, la municipalidad expondrá al público por el término de ocho dias el resumen de la riqueza imponible.

Cualquier vecino ó residente puede denunciar en este plazo las ocultaciones que se hayan cometido. La ocultacion será castigada con una multa equivalente al duplo de la cantidad que resultaria defraudada, cuyo importe se distribuirá por mitad entre el fondo municipal y el denunciador. El denunciador estará obligado á ofrecer las pruebas de la denuncia, sin cuyo requisito no tendrá derecho a la participacion en la multa que se imponga al ocultador.

Art. 37. Los ayuntamientos reclamarán á las administraciones económicas de la provincia una lista que comprenda los nombres de los que en sus cajas hayan presentado facturas para cobrar los intereses de los títulos de la Deuda pública y el importe de los intereses abonados.

Estos datos se tendrán en cuenta para la imposicion de las respectivas cuotas, á no ser que los interesados justifiquen haber cobrado los intereses de los títulos por cuenta de otra persona. En este caso el alcalde pasará comunicacion al del ayuntamiento donde resida el propietario de los títulos para que se le incluya en el repartimiento de aquel distrito municipal.

Art. 38. Los Bancos y Sociedades pagarán en proporcion á las utilidades que tuvieran justificadas por los balances ó inventarios, pudiendo tambien servir de base para fijar la utilidad imponible el capital social señalado á las mismas.

Las sucursales se considerarán como Compañías distintas para los efectos del repartimiento, de tal modo que cada centro contribuya en el punto donde se halle establecido, y sólo por el capital con que funcione.

Las Sociedades de explotacion de minas, de industrias y artefactos y de fincas contribuirán en el punto donde radicquen sus establecimientos.

Las utilidades procedentes de estas Compañías no son imputables á los socios ó accionistas para el pago del repartimiento.

Art. 39. A los hacendados forasteros sin casa abierta se dará conocimiento de las cuotas que les correspondan por medio del Alcalde del punto donde residan, entregándose, además, un duplicado á sus colonos ó arrendatarios.

Para cobrar las cuotas cuando los

hacendados no tengan casa abierta en la localidad se acudirá á los administradores ó apoderados, y en su defecto á los colonos ó arrendatarios, reservándose á estos el derecho de reclamar á los propietarios el importe ó deducirlo al hacerles el pago de la renta. Si el colono no se prestase á satisfacer la cuota con estas condiciones, podrá el Ayuntamiento proceder contra la finca.

Art. 40. Para la aplicacion de la base 3.ª, art. 12 de la ley, se fijan las siguientes escalas:

Tarifa núm. 1, clase 1.ª de 16 á 20 veces la cuota.	id.	id.
2.ª de 12 á 16 id.	id.	id.
3.ª de 11 á 15 id.	id.	id.
4.ª de 10 á 14 id.	id.	id.
5.ª de 8 á 12 id.	id.	id.
6.ª de 6 á 10 id.	id.	id.
7.ª de 5 á 9 id.	id.	id.
Tarifas núms. 2.ª y 3.ª de 16 á 20 id.	id.	id.

Exceptuánse los Bancos y Sociedades, que pagarán con sujecion á lo prescrito en este reglamento.

Tarifa especial de profesiones del orden civil.

Madrid. . . . . de 17 á 20 veces la cuota.	id.	id.
Poblaciones de 1.ª clase 16 á 19 id.	id.	id.
2.ª id. 15 á 18 id.	id.	id.
3.ª id. 14 á 17 id.	id.	id.
4.ª id. 13 á 16 id.	id.	id.
5.ª id. 12 á 15 id.	id.	id.
6.ª id. 11 á 14 id.	id.	id.
7.ª id. 10 á 13 id.	id.	id.
8.ª id. 8 á 12 id.	id.	id.

Del orden judicial.

Madrid. . . . . de 16 á 20 veces la cuota.	id.	id.
1.ª clase. } Audiencias. 12 á 18 id.	id.	id.
2.ª id. . . . . } Juzgados. . . . . 10 á 16 id.	id.	id.
1.ª clase. } . . . . .	id.	id.
2.ª id. . . . . } . . . . .	id.	id.
3.ª id. . . . . } . . . . .	id.	id.
En las demas poblaciones. . . . . 8 á 12 id.	id.	id.
Si base de poblacion. . . . . 8 á 16 id.	id.	id.
De patentes. . . . . 5 á 10 id.	id.	id.

Las Juntas de Ayuntamientos aplicarán las escalas anteriores dentro de los límites señalados, segun las circunstancias especiales de cada localidad, industria y contribuyente.

Están exentos del pago de este repartimiento:

1.º Los abogados y procuradores que, en virtud de nombramiento especial de oficio, entiendan por turno en los asuntos civiles de pobres y en las causas criminales; pero sin que esta exencion exceda respecto de los Abogados:

- En Madrid de 90.
- En Barcelona, Granada, Sevilla y Valencia de 60.
- En la Coruña, Valladolid y Zaragoza de 40.
- En Búrgos de 30.
- En Albacete de 20.
- En Cáceres y Mallorca de 15.
- Y en Oviedo y Santa Cruz de Tenerife de 10.

En cuanto á los procuradores, no excederá el número de las exenciones de la tercera parte respectivamente fijada á los abogados.

En el máximo de exencion, comprenden los abogados y procuradores que entiendan en los pleitos y de los tribunales superiores y de los juzgados de primera instancia existentes en las poblaciones mencionadas.

Los Regentes de las audiencias entrarán de que todos los años se remitan

la administración económica listas de abogados y procuradores á quienes se concede la exención.

En cada juzgado de primera instancia de poblaciones donde no existan audiencias territoriales se considerarán dos abogados y un procurador. También se considerarán exentos:

En las audiencias de Madrid, Barcelona, Coruña, Granada, Sevilla, Valladolid y Zaragoza dos Relatores y dos escribanos de Cámara; y en las audiencias de Albacete, Burgos, Cáceres, Santa Cruz de Tenerife, Mallorca y Oviedo un Relator y un escribano de Cámara.

En los juzgados de primera instancia donde no haya escribanos dedicados exclusivamente al despacho de causas criminales, sino que éstas se despachen indistintamente por todos ellos, alcanzará la exención á un solo escribano en cada juzgado.

Si en estos no hubiese mas que un escribano que intervenga en las causas criminales, se les rebajará una cuarta parte de la cuota.

2.º Los cosecheros de vino y aceite, y los propietarios y labradores de los demás frutos de la tierra por las ventas que hagan al por mayor en los depósitos establecidos en el punto de producción, y también por las que verifiquen en las plazas ó mercados de los pueblos inmediatos á que lleven sus cosechas; pero quedando sujetos al impuesto si las ventas las ejecutan en almacén ó establecimiento permanente fuera del punto de producción.

Los mismos cosecheros, propietarios y labradores por las ventas que hagan al por menor en un sólo local de los edificios en que tengan constituidos los depósitos de sus cosechas.

Cuando estos depósitos sean de cosechas de vino y aceite, y se hallen en despoblado, por cuya causa no pueda hacerse en ellos la venta al por menor á que se refiere el párrafo precedente, disfrutará de exención el local abierto al público dentro de la población para dicho objeto, siempre que no tenga otro para la venta al por mayor.

3.º Los criaderos de ganado de todas clases, considerándose como tales los que en número desproporcionado tengan reses de vientre, y no los que compran para engordar ó beneficiar.

4.º Los labradores por los demás ganados por que paguen la contribución territorial, siempre que consten detalladamente en los amillamientos ó en los datos estadísticos en que se funda el impuesto.

5.º Los cosecheros de vino que queman solamente el orujo ó 32 litros (2 arrobas) de vino de su propia cosecha para la fabricación del aguardiente.

6.º Los propietarios de montes por el beneficio y carboneo de las leñas y maderas de construcción de los montes que les pertenezcan, siempre que las vendan dentro del término municipal de la producción.

Cuando el territorio en que se hallen enclavados los montes carezca de vías de comunicación se ampliará la exención; y previo el oportuno expediente instruido en la administración económica

de la provincia y consultado á la dirección general de contribuciones, se concederá permiso al dueño ó dueños para llevar las maderas ó leñas á otro mercado, siempre que lo verifiquen los mismos dueños.

7.º Los establecimientos de enseñanza costeados por el Estado ó por los fondos comunes de las provincias ó pueblos y por fundaciones pías.

8.º Los hospitales, casas de Beneficencia y demás establecimientos pías por las corridas de toros, novillos, bailes de máscara y otros espectáculos públicos; pero sin alcanzar la exención á cualquiera empresario con quien dichos establecimientos contraten ó arrienden la ejecución de ellos.

9.º Las Sociedades de seguros mútuos cuyas operaciones se reduzcan á repartir entre los suscritores el equivalente de los daños sufridos por una parte de ellos sin opción á beneficios.

10. Las Cajas de Ahorros y Montes de piedad establecidos con real aprobación, cuyos capitales y acumulación de beneficios se emplean exclusivamente en prestamos sobre alhajas ú otros efectos. Pero si dichos establecimientos son por acciones entre las cuales se reparten los beneficios, ó se emplean los capitales en otros objetos de especulación, serán considerados como Sociedades anónimas, y pagarán como tales Sociedades segun previene este reglamento.

11. Los carros y carretas de bueyes destinados á usos de agricultura, siempre que se limiten al acarreo de mieses ó de cosechas propias.

12. Y por último, las industrias, profesiones, artes y oficios que se ejerzan dentro de las plazas de Ceuta, Alhucemas, Melilla, Peñon de la Gomera y Chafarinas.

Art. 41. La Junta municipal, teniendo en cuenta lo prescrito del artículo 12 de la ley, resolverá las reclamaciones que se hubieren presentado, y fijará la cantidad que cada seccion debe pagar, teniendo en cuenta para ello las utilidades valuadas de todos sus individuos y la suma total repartible. (Art. 14 de la ley.)

Art. 42. Los síndicos de cada seccion fijarán la cantidad que á cada contribuyente corresponda (Art. 15 de la ley), exponiendo al público el resultado por el término de ocho dias, en los cuales podrán los interesados apelar al Ayuntamiento.

Art. 43. Los gastos generales que origine la formación del repartimiento se abonarán de los fondos del Municipio. Los causados á instancia de parte lo serán segun lo prescrito en el cap. III de este reglamento.

#### SECCION CUARTA.

##### Consumos.

Art. 44. Sólo en los casos previstos en el párrafo cuarto del art. 2.º de la ley podrá acordarse el establecimiento de los consumos. Este acuerdo se adoptará por la junta municipal en seccion pública.

Art. 45. La Junta municipal, al adoptar el expresado acuerdo, desig-

nará también los artículos que hayan de ser objeto del impuesto, fijará las tarifas, y determinará la forma ó formas de percepción, cuidando particularmente de que, conforme á lo dispuesto en el art. 21 de la ley, no se perjudique por tal concepto al tráfico ni se ponga obstáculo á la libre circulación.

Art. 46. El Ayuntamiento remitirá al Gobierno 15 dias ántes de aquel en que debe empezar á regir el acuerdo á que se refieren los dos artículos anteriores copia literal del mismo, expresando la fecha en que ha de empezar á cobrarse el impuesto y los precios medios que habrán de servir para la formación de las tarifas, lo cual se hará constar por certificación de los precios corrientes en el mercado en cada trimestre del año anterior.

Art. 47. Cuando el Gobernador considere infringida la ley por el acuerdo, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Gobierno á fin de que pueda tener efecto la inspección ordenada por el párrafo quinto del art. 99 de la Constitución.

Art. 48. Las reclamaciones de los particulares acerca de la ilegalidad de los acuerdos se presentarán al Gobernador á fin de que si lo cree oportuno proceda segun previene el artículo anterior.

Art. 49. Si la junta municipal acordare exigir el impuesto de consumos por encabezamiento con los fabricantes, cosecheros ó expendedores, quedarán, no obstante, sujetos al pago segun las tarifas señaladas los mercaderes ambulantes y tragineros. Quedarán asimismo sujetos á él los particulares por las especies que introduzcan en el pueblo para su consumo. Esto se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 21 de la ley.

Art. 50. Determinada la forma en que ha de exigirse el impuesto de consumos, corresponde al Ayuntamiento dictar las instrucciones necesarias para su aplicación. De estas instrucciones se pasará copia autorizada al Gobernador de la provincia 15 dias ántes de que empiecen á regir.

#### CAPITULO IV.

##### Recursos contra los acuerdos de los Ayuntamientos y juntas municipales.

Art. 51. Los recursos de agravios ó apelaciones que los particulares interpongan en virtud de lo prescrito en los artículos 17, 22, 28, 31, y 35 se presentaran ante el alcalde, que los remitirá á la Diputación provincial en el preciso término de ocho dias, informados previamente por la junta ó los síndicos, segun el caso, los cuales expresarán con toda puntualidad la exactitud ó inexactitud de los hechos en que se apoya la reclamación.

Art. 52. La Diputación provincial resolverá de plano la reclamación si por las manifestaciones del interesado y los informes de la junta ó los síndicos puede apreciar cumplidamente la justicia de aquella; en otro caso mandará practicar las diligencias que crea oportunas. Las que hayan de tener lugar en el pueblo mismo serán sometidas al juez de paz. La exhibición de

documentos tendrá lugar ante la Diputación provincial.

Art. 53. Terminadas las pruebas y comunicadas á los interesados, la Diputación en vista pública, en la cual podrán los reclamantes hacer las observaciones que crean oportunas, resolverá definitivamente confirmando, revocando ó modificando el acuerdo apelado.

La decisión deberá dictarse dentro de un mes, á contar desde la fecha en que la reclamación se hubiere recibido en la Diputación provincial.

Art. 54. Los gastos que se causen en virtud de las reclamaciones que la ley autoriza se abonarán, en todo ó en parte, de los fondos municipales si se revoca el acuerdo apelado; por los particulares si se desestima la reclamación, y por los síndicos y Concejales si revocado el acuerdo se declara á los mismos responsables de tal abono.

La Diputación provincial, al resolver las reclamaciones, expresará quien debe satisfacer tales gastos.

##### Artículos á dictionales.

Artículo 1.º Sin perjuicio de lo prescrito en la disposición transitoria de la ley, los ayuntamientos establecerán y regularizarán su situación económica conforme á lo dispuesto en la misma y en el presente reglamento, debiendo verificarlo desde el 1.º de julio próximo.

Art. 2.º Para conseguir esto los ayuntamientos procederán desde luego á las operaciones preliminares que las citadas disposiciones exigen, y á la determinación de los recursos que deban figurar en el presupuesto del próximo año económico.

Art. 3.º En cumplimiento de lo prescrito en la primera de las disposiciones transitorias de la ley, los Ayuntamientos que se hallen solventes en el pago de los cupos del impuesto personal, tanto por los tres trimestres del año económico de 1868-69, como por los del actual ejercicio, dispondrán desde luego de los recargos municipales sobre las contribuciones territorial é industrial.

Respecto de las municipalidades que no hayan llegado á cubrir en todo ó en parte el impuesto, procederá la Administración económica á compensar lo que por este concepto adeuden:

1.º Con el importe de los intereses que deban percibir las municipalidades de las inscripciones intrasferibles y de los bonos del Tesoro que posean ó á que tengan derecho.

2.º Con los recargos municipales de la contribución territorial é industrial.

3.º Con los bonos del Tesoro que al ayuntamiento correspondan si los dos conceptos indicados no bastasen á producir la compensación.

Una ley especial fijará el modo de reponer los ayuntamientos el importe de los bonos enajenados por este concepto.

Art. 4.º Si despues de ejecutada dicha compensación resultasen todavía débitos á favor del Tesoro por el impuesto personal, serán satisfechos por

los ayuntamientos con el producto de los arbitrios ó medios que se establezcan en la forma prevenida en la ley.

Art. 5.º Por el ministerio de Hacienda se dictarán las disposiciones necesarias para que las dependencias de la administración económica entreguen el importe de los recargos á los ayuntamientos que se hallen en el caso previsto por el párrafo primero del artículo 3.º de los adicionales, y también

para que se verifique la compensación ordenada en las disposiciones anteriores.

El mismo departamento cuidará de que las Administraciones económicas faciliten á los ayuntamientos los datos que en este reglamento se mencionan.

Madrid 20 de abril de 1870.—El ministro de la Gobernación, Nicolas Maria Rivero.

Aprobado por S. A.—Rivero.

*Modelo del estado á que se refiere el art. 32.*

NOMBRES.	Profesion.	Renta ó utilidad anual.	Cantidades que satisface por contribucion del Estado.	Observaciones.	Utilidad imponible.	Cuota que deben pagar.
	Bracero, obrero, empleado, industrial, colono, Médico, Abogado etcetera (1).	Por bienes inmuebles. Idem muebles. Idem capital. Idem semovientes. Idem productos de su industria. Profesion (2).	Por contribucion territorial. Idem industria. Idem des-cuento como empleado.		Esta casilla se llenará por los resúmenes de la junta municipal.	Esta se llenará por las secciones.

(1) El que tenga mas de una profesion lo expresará así.  
(2) El que tenga mas de un origen de renta lo expresará igualmente.

*Circular.*

Al publicar el reglamento para la aplicacion de la ley de 23 de febrero último sobre ingresos municipales y provinciales, cúmplenme dirigir á V. S. las instrucciones necesarias á fin de que, comprendiendo con toda exactitud el espíritu de esta importante y trascendental reforma económica, procure allanar cualquier obstáculo que á su planteamiento se ofrezca.

La nueva ley, inspirada en el art. 99 de la Constitución vigente, á la vez que reconoce la autonomía de los pueblos y provincias en cuanto se refiere á los ingresos de sus presupuestos, determina la manera y el carácter con que V. S. debe intervenir en tales asuntos á fin de que el gobierno pueda, en caso necesario, adoptar ó proponer á las Cortes las medidas necesarias para evitar que las corporaciones locales traspasen el círculo de sus atribuciones en perjuicio de los intereses generales y permanentes del país.

El primer deber de V. S. en este punto es respetar la integridad de las facultades reconocidas á las diputaciones y ayuntamientos, y al propio tiempo vigilar la exacta y puntual observancia de la ley por los medios que ella misma determina y por los que establecen las de organización municipal y provincial. Al efecto cuidará V. S. muy especialmente de que los ayuntamientos le comuniquen, según está prevenido, todas las disposiciones que adopten en lo relativo al impuesto de consumos, remitiéndole copia así de los acuerdos tomados para establecerlo, como de las instrucciones dictadas para percibirlo.

Tanto en estos casos, como en aque-

llos en que los particulares entablen alguna reclamación sobre esta materia, examinará V. S. con sumo esmero si los ayuntamientos, al fijar la forma en que deba cobrarse tal impuesto, han observado lo prescrito en el art. 21 de la ley; si han gravado artículos de los exceptuados, y si las circunstancias del municipio, autorizan el establecimiento de un impuesto que sólo han admitido las Cortes Constituyentes como supremo y siempre transitorio recurso.

En el caso de observar V. S. alguna ilegalidad, dará inmediatamente cuenta al gobierno á fin de que se adopten las medidas oportunas.

Peró no es esta la única función que en tal materia corresponde á la autoridad. A ella cumple también allanar los obstáculos que embaracen la libre iniciativa de las corporaciones populares, y excitarlas asimismo á que regularicen su situación económica. Por este concepto debe V. S., en primer término, cuidar de que la Diputación provincial fije el presupuesto que ha de regir en el próximo año económico y señale á cada pueblo la cantidad con que ha de contribuir á los gastos de la provincia. Igualmente hará que los ayuntamientos ejecuten las operaciones preliminares del presupuesto formando las secciones, distribuyendo los asociados, constituyendo la junta municipal y fijando, por último, los ingresos con que deben cubrir sus atenciones en el inmediato año económico. V. S. procurará á todo trance que desde 1.º de julio próximo quede regularizada la situación económica de los pueblos y provincias, evitando el conflicto que surgiria si la injuria ó resistencia de aquellos prolongase el penoso estado en que se hallan á pesar de

tener medios legales para mejorarlo.

A V. S., como inmediato representante del gobierno en esa provincia, corresponde procurar que se entre en una marcha libre y desembarazada, ayudando á plantear el nuevo sistema, haciendo comprender su espíritu, excitando la actividad de las corporaciones locales, y procurando vencer toda dificultad que se presente hasta conseguir la definitiva aplicación de la reforma. Si V. S. hallase deficiente su autoridad, dé cuenta inmediata al gobierno, el cual, ya resolviendo por sí, ya proponiendo á las Cortes las oportunas medidas legislativas, hará cesar toda clase de inconvenientes.

Al cumplir las anteriores prescripciones debe considerar V. S. que en este momento se necesita extraordinaria solicitud por parte de la autoridad para conseguir el patriótico fin que el Gobierno se propone. Cuando de la tutela oficial que ahogaba la iniciativa de las Corporaciones locales se ha pasado á un régimen del todo distinto, es posible que no se comprenda el nuevo sistema en toda su pureza, y que los precedentes históricos extravíen la acción de las Corporaciones populares, exigiendo una inspección mayor por parte del Estado. Pero tal situación ha de ser transitoria: de día en día, las corporaciones locales han de comprender el medio de emplear sus facultades, de regularizar su situación y de entrar en un período normal, quedando la inspección del gobierno como suprema garantía á qué, solo por excepción, será preciso recurrir.

Estas indicaciones bastan á determinar el carácter con que V. S. debe intervenir en tan graves asuntos para remover, con arreglo á la ley, los obstáculos que á su ejecución se opongan, y para evitar cualquier conflicto que pudiera nacer de su mala interpretación. Esfuércese V. S. por convencer á las Corporaciones populares de que el acertado régimen económico, establecido por la nueva ley, es la sólida base sobre que ha de asentarse la libre acción de Ayuntamientos y Diputaciones en la gestión de sus propios intereses. Demuéstreles en fin, que sólo aplicando estos principios puede fundarse la legítima y provechosa descentralización administrativa que la Constitución consigna en sus preceptos, que la sabiduría de las Cortes va á establecer en las leyes orgánicas, y que es el objeto á que se encaminan los constantes esfuerzos del gobierno.

Madrid 20 de abril de 1870.—Rivero.—Señor Gobernador de la provincia de....»

Lo que he dispuesto se inserte en este Boletín oficial para su publicidad y cumplimiento. Palma 26 abril de 1870.—José Sanchez Tagle.

**Núm. 1439.**

D. Francisco Maria Donnet, juez de primera instancia del distrito de la Lonja de este partido.

Quien quisiere hacer postura á una casa consistente en piso bajo y porción de piso

principal, destinada toda ella á fábrica de tejidos situada en Son Sardina término municipal de esta ciudad y propia de difunto D. José Alvarez que mide una superficie de trescientos cincuenta y cinco metros quince decímetros cuadrados equivalentes á veinte destres incluso el andén que rodea la mayor parte del edificio y además contiene un camino de dos metros treinta centímetros de ancho por treinta y siete metros noventa centímetros de largo que comprende un área de ochenta y siete metros diez y siete centímetros equivalentes á cuatro destres ochenta y nueve decímetros, cuyo camino empalmado con el denominado dels Reis dirige á la misma propiedad. En el andén de la parte del Norte existe una servidumbre pasiva ó sea de paso para el servicio de otras propiedades, linda por Norte con propiedad de Antonio Juan Vich y con las de Catalina Serra, al Sur con el mencionado camino dels Reis y tierra de Margarita Romaguera, al Este con casa de dicha Romaguera y tierras de Jaime Vich y al Oeste con tierras de Francisco Vich, cuya finca se hallaba justipreciada en la cantidad de dos mil seiscientos sesenta escudos y se halla retasada en dos mil ciento sesenta escudos. Y á una porción de cordel azul de tres palmas y medio de ancho, justipreciado á ocho reales setenta y cinco centimos cana, otra ídem de tres palmas ancho á ocho reales setenta y cinco centimos cana, otra ídem de listado azul y blanco de cuatro palmas ancho á seis reales cana; otra porción de cuadros ó daos de cuatro palmas ancho de diferentes colores á seis reales cincuenta centimos cana, otra ídem de tres palmas y medio á seis reales cana, otra porción de paquetes algodón número veinte y dos á ciento cinco reales una, otra porción de algodón encarnado número veinte á veinte reales la libra. Y se saca á pública subasta, esto es, las ropas y efectos por término de nueve días y la finca por el de veinte para con su producto hacer pago á Don Ignacio Fuster de la cantidad que le reclama intereses y costas; acuda á los estrados de este juzgado el día tres de mayo próximo venidero á las doce de su mañana hora señalada para la subasta y remate de las ropas y efectos espresados, y para la finca el día diez y nueve del mismo mes y á la misma hora; en la inteligencia que los gastos de subasta remate, otorgamiento de escritura y demás que ocasione el traspaso serán de cargo del adquirente. Palma veinte y uno de abril de mil ochocientos setenta.—Francisco Maria Donnet.—Por mandado de S. S., Antonio Maria Rosselló.

**ADVERTENCIA.**

El gran número de comunicaciones que los ayuntamientos de la provincia y otras corporaciones y autoridades dirigen á la imprenta del Boletín oficial con las cuales acompañan anuncios u otros documentos para su inserción en dicho periódico, nos hacen recordar la disposición del gobierno de provincia que previene sea remitido á dicha oficina cuanto deba publicarse en el Boletín; de lo contrario se esponen los remitentes á que sufra retraso lo que debe publicarse ó que experimente estravio todo lo cual ocasiona perjuicios.

PALMA.

IMPRESA DE PEDRO JOSÉ GELABERT.